

El pasado 26 de abril se celebró el segundo evento sobre *Paz Ambiental Urbana desde experiencias de fragilidad y resiliencia comunitaria en Colombia*, con la presencia de actores institucionales y de organizaciones comunitarias que vienen trabajando en los territorios desde la resiliencia urbana y la adaptación al cambio climático.

El evento fue organizado por: la Red Reciclar Ciudad, Recnet, organización dedicada a la resiliencia urbana y la adaptación al cambio climático de las ciudades, con una gran experiencia en Colombia, y el Laboratorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad de Manizales.

La doctora Nausheen H. Anwar, directora del Laboratorio Urbano del Institute of Business Administration en Karachi, Pakistan, dio inicio a la jornada destacando la importancia de hablar de la violencia en el estudio de los asuntos urbanos y el cambio climático y seguir investigando en torno a estos temas desde una perspectiva multidisciplinar. Carlos Fernando Agudelo, por su parte, como director de la Maestría en planificación y gestión del territorio y del pregrado en Urbanismo de la Universidad de la Salle, mostró los avances realizados en el proyecto de Laboratorios Locales para la Resiliencia, que buscan ser un puente entre universidades y organizaciones académicas y los territorios, generando espacios de trabajo y observación de las problemáticas, escuchando la voz de las comunidades en la identificación de sus propias **problemáticas** y oportunidades. Este proyecto, realizado con financiación internacional, a través del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de Catalunya, proyecta un análisis comunitario y académico de tres laboratorios locales en tres puntos de Bogotá, en una metodología replicable a otros contextos de violencia ambiental y urbana. Lina Zambrano, desde el Laboratorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad de Manizales puso el énfasis en la salud mental, como un aspecto a ser apoyado desde la participación comunitaria, gobernanza y la participación institucional, la empresa privada y educativa, en todos los contextos de resiliencia urbana.

Después de un análisis académico del estado de la cuestión, Antonieta Peregrina de Recnet y la red NATURA, como facilitadora del evento, daba paso a un segundo bloque que permitió entender la complejidad de las problemáticas comunitarias a través de unos puntos en común que se repiten en estos contextos, analizando las necesidades de los procesos comunitarios ante los conflictos ambientales y las estrategias comunitarias para la solución de estos conflictos. Este bloque contó con la participación de Alejandra Serna, del Movimiento de Laderas en Medellín, Luz Dary, de la Corporación Arocoiris en Usme, Bertilda Salas, de la Mesa Técnica de Altos de la Estancia y Maicol Ramírez, de la Red Cultural Manitas y la Red Agroecológica del Sur.

Alejandra Serna, del Movimiento de Laderas en Medellín, hablaba sobre la problemática del reasentamiento: “Porque uno de los principales riesgos en nuestros territorios es el riesgo a no permanecer, a no podernos quedar ahí bien sea por los desastres naturales, bien sea por los macroproyectos de renovación urbana y de intervención por parte de la Alcaldía de Medellín, entre otros riesgos, como los grupos armados y la presión a liderazgos comunitarios.”

El desplazamiento, consecuencia de la violencia, que se da a nivel nacional también tiene su reflejo dentro de las ciudades, dónde poblaciones son reasentadas o desplazadas a otros territorios, generando una dinámica de desarraigo, con graves consecuencias sociales.

“Entonces digamos que permanecer en el territorio es nuestra principal lucha” puntualizó Alejandra.

En los territorios las problemáticas ambientales están íntimamente relacionadas con el riesgo y este, a su vez, con la mala gestión de las aguas lluvia por la inexistencia de servicios públicos, como el servicio de acueducto. En este sentido Luz Dary, de Usme, señala el aumento desmesurado de los barrios de borde de la ciudad, a través de la llegada de nuevos habitantes. En este sentido se propone un enfoque en la educación y la sensibilización ambiental, con adultos y sobretodo con niños, respecto a lo cual explica su experiencia como líder comunitaria: “Tratamos de hacer limpieza de la quebrada, vamos, hacemos también la olla comunitaria y estamos compartiendo con ellos para que vean ellos la necesidad de cuidar el ambiente.”

También desde el sur de la ciudad, en Ciudad Bolívar, Maicol Ramírez incide en la proyección que las organizaciones comunitarias tienen para mejorar la presencia institucional en los territorios, pero, “consideramos que la falta de continuidad en procesos institucionales hace que sea muy escueto ese apoyo que ellos brindan y finalmente se termina fragmentando el tejido organizativo, el tejido social y por supuesto evidenciamos unas falencias en la identidad territorial.” Maicol, desde la Red Agroecológica del Sur y la Red Cultural Manitas apuesta por la creación de corredores ambientales y culturales alrededor de las quebradas, en concreto de la quebrada Limas, en las que viene trabajando desde hace varios años.

Desde Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, Bertilda Salas ha venido trabajando como líder comunitaria desde hace décadas y destaca la relevancia de la mesa técnica de trabajo Altos de la Estancia, una organización de organizaciones que se fundó en 1997 y que ha conseguido, a través de un fuerte trabajo de reivindicación, logros como la derogación de resoluciones que permitían la explotación minera en ciertos sectores del barrio.

Los participantes de este bloque tienen en común que son habitantes de los bordes urbanos y el origen de estos asentamientos son la consecuencia directa del desplazamiento debido a la violencia. Y esto tiene un vínculo directo con el testimonio y participación de Eder García, presidente de la Asamblea Campesina del Cesar, que reivindica la necesidad de una apuesta por la recuperación “de la identidad campesina y del buen vivir”.

Eder García es el ejemplo de una tendencia nacional de desplazamiento del campo a la ciudad, pero también de la vuelta al campo y el trabajo por una restitución de tierras efectiva. En sus palabras: “En mi propio caso, mi desplazamiento fue hacia la ciudad de Barranquilla y nos tocó vivir... yo me fui prácticamente con nada y nos tocó llegar a vivir en esas zonas de alto riesgo que muchos de los compañeros han mencionado en Bogotá, en Medellín.” En una vuelta al territorio, han podido vivir la desproporción del impacto de la minería que ha afectado profundamente al medio ambiente y sus formas de vida, tanto del campesinado como de las comunidades indígenas. Tal es el caso de la comunidad yukpa, que ha perdido su fuente de alimentación primaria, el pescado del río Maracas, por la contaminación de este.

Pero esta violencia ambiental no solamente se ejerce por la minería sino que también tiene otros orígenes. Como explicaba Angélica, desde la organización PAX Christi, con base en Holanda, “no es solo la minería: es la industria, es la ganadería extensiva y son los negocios ilícitos, que el Cesar tiene una larga historia de eso. Pero el Cesar también tiene una gran

movilización histórica de su población pese a la gran cooptación del estado y por supuesto la ACC es evidencia de eso. La organización de la ACC surge en medio de la restitución de las tierras y en ese sentido se empalma con el quinto de los puntos de la Habana”, haciendo patente como el conflicto y la violencia ambiental deben ser tenidos en cuenta en el proceso de paz colombiano para luchar contra el despoblamiento y el saqueo de la ruralidad colombiana.

Jorge Manrique, representante de ONU Habitat en Colombia y Ecuador, por su parte, ponía el foco en la fuerte desigualdad social del país, que segrega a diferentes niveles “en un país en el que los más altos índices de acumulación de la riqueza y las oportunidades no solo en unas manos, sino que también se da la concentración de la riqueza y las oportunidades en unos territorios específicos”. Y en referencia a esta segregación seguía:

“Mientras hay territorios en Colombia donde se vive como se vive en el siglo XXI, con todas las comodidades y desarrollos tecnológicos y acceso a bienes y servicios, hay otros que están viviendo en el mismo país como si estuvieran en el siglo XVIII, sin servicios públicos domiciliarios, con letrinas, con casas en piso de barro y desechos, con agua impotable, con enfermedades infectocontagiosas e inmunoprevenibles. Es decir, como se vivía en el siglo XVIII, pero esa diferencia de esa inequidad entre las regiones no solamente se da en contexto nacional, sino al interior de las mismas ciudades.”

Recalcaba también Jorge la importancia del ordenamiento territorial para la lucha en pro de la paz ambiental, como un asunto de todos y todas los habitantes de los territorios.

En ese mismo sentido, la última ponente del simposio, Martha Ochoa, consultora nacional en gestión de riesgo y adaptación, destacaba el problema de la ley 1523 del 2012, de gestión del riesgo, que en esencia tenía un enfoque progresista, en su tránsito a leyes de ordenamiento territorial y otras estrategias de planificación y “se da uno cuenta que hay un problema de enfoque”, “y en parte tiene que ver con esa concepción del riesgo como algo que podemos delimitar y controlar hasta tal punto de llegar a zonificarlo en unos mapas.”

En la ley se define el riesgo a través de una ecuación en la que se incluyen las “amenazas naturales, las socionaturales, las antrópicas y desde ese marco de la ley se dice que no se pueden concebir o no se pueden incluir las amenazas antrópicas intencionales. Y, ¿a qué me refiero con intencionales?, a todas las lógicas que tienen que ver con el conflicto. Y en un país dónde hemos trasegado por condiciones de conflicto, de conflicto armado, de despojo, decir que estas amenazas no deben estar consideradas en estos escenarios de riesgo pues es desconocer precisamente que el riesgo tiene que ver con esa construcción social y que está relacionado precisamente con unos modelos de desarrollo que están relacionados con el despojo y digamos con esta visión también de control territorial”, en palabras de la especialista. Y concluye, en relación con la identidad territorial de las comunidades en los territorios:

“Hay que ampliar esta mirada y este sentipensar frente a la manera como se interviene desde la institucionalidad de un sistema y desde una política como la que actualmente tenemos desde el país para abordar los riesgos de desastre”.

